

DECLARACIÓN DE LA XIII ASAMBLEA REGIONAL DE MIEMBROS DE LA COALICIÓN INTERNACIONAL PARA EL ACCESO A LA TIERRA - AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

XI Foro de la Tierra ALC “Desigualdad en América Latina y el Caribe: impacto y propuestas para la gobernanza de la tierra”

Las 50 organizaciones integrantes de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (International Land Coalition – ILC), de 16 países de América Latina y el Caribe, reunidas virtualmente en nuestra XIII Asamblea regional y en el XI Foro de la Tierra de América Latina y el Caribe 2020 que se realizó sobre el tema: “Desigualdad en América Latina y el Caribe: impacto y propuestas para la gobernanza de la tierra”, después de reflexionar sobre la desigualdad y las implicancias para los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes que viven de la tierra y en sus territorios, y considerando particularmente el impacto en las mujeres y jóvenes, en un contexto de crisis sanitaria de profundas afectaciones hacemos la siguiente Declaración:

1 **América Latina es la región más desigual** en el mundo en cuanto al acceso a la tierra, lo cual es un problema de carácter estructural. En este contexto, la COVID-19 colocó a la región en el centro de la pandemia a nivel global, con una consiguiente estela de dolor y muerte que, en muchos de nuestros países, puso en riesgo la supervivencia de pueblos indígenas y campesinos. **La pandemia ha evidenciado con mayor fuerza las enormes brechas de desigualdad develando las condiciones de pobreza y precariedad en las que viven los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes de Latinoamérica, siendo las mujeres y los y las jóvenes quienes sufren la mayor exclusión.** Estos grupos vulnerables de la población se encuentran profundamente golpeados por las medidas de confinamiento y por las restricciones de movilidad, y en mayor riesgo tras las medidas para la reactivación económica de los países. La pandemia ha mostrado con crudeza que, pese al crecimiento económico de las últimas décadas en muchos países, persiste la ausencia de atención por parte de los Estados a las grandes mayorías de la población en los diversos territorios, la incapacidad de los sistemas políticos, y las dificultades reales de las instituciones para reaccionar ante las crisis.



- 2** En el sector rural, la **pandemia** generó serias dificultades para que la agricultura familiar lleve al mercado su producción, redujo casi a cero los ingresos de los y las trabajadoras agrícolas y aumentó el costo del transporte, lo que ha generado la **descapitalización de las familias rurales**. Asimismo, éstas **no han contado con suficientes programas de apoyo**, quedando muchas comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en total abandono, y miles de familias sin acceso a alimentos suficientes, incrementándose el riesgo de sufrir hambre y desnutrición. Organismos internacionales como la FAO advierten a mediano plazo una **posible crisis alimentaria tanto de producción como de consumo** para nuestros pueblos.
- 3** Los **estados de emergencia y los confinamientos** han sido utilizados por los Estados para ejercer **mayor control sobre la sociedad, produciendo con ello la desmovilización del movimiento campesino e indígena, e incrementándose las detenciones y la vigilancia de las y los defensores de la tierra y el territorio**. Asimismo, el contexto ha sido funcional en muchos países para afianzar alianzas de los gobiernos con las élites empresariales, y una oportunidad para aplicar **políticas agrarias que amenazan la vida de los pueblos, su autonomía y la gobernanza de sus territorios**.
- 4** En toda nuestra región, y aun en este tiempo de pandemia, ha continuado profundizándose el **extractivismo y el agronegocio**, con las consiguientes consecuencias negativas para la naturaleza y para las poblaciones que viven en los territorios. La tierra sigue despertando un enorme interés de diversos grupos económicos y financieros que están invirtiendo en la compra de amplias extensiones de tierra, generándose **procesos de acaparamiento y extranjerización**. Lo anterior, ocasiona frecuentemente el **despojo de tierras de grupos campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes, y una concentración del poder político por parte de privados** en los territorios, agudizando el empobrecimiento de las poblaciones rurales.
- 5** El despojo de la tierra y los territorios, profundizado por la hegemonía del modelo neoliberal y ahora por la pandemia y la reactivación económica, han generado procesos de conflictividad donde **se violan los derechos humanos de quienes ejercen la defensa de la tierra y el territorio**. Nuestra región es también la **más letal del mundo para las personas defensoras de los derechos por la tierra, los territorios y el medioambiente, siendo Colombia, Brasil, México, Honduras y Guatemala los países con más asesinatos** de defensores y defensoras.
- 6** El control que la agroindustria y las políticas públicas ejercen sobre los **sistemas agroalimentarios, así como la dependencia de semillas transgénicas y agroquímicos, está poniendo en riesgo la biodiversidad y genera pérdida de autonomía de las familias agricultoras para decidir sobre la producción y su destino**, con severos riesgos para la soberanía y seguridad alimentaria de los países.
- 7** No podemos dejar de mencionar los impactos del **cambio climático**, los cuales son cada vez más severos pese a los **esfuerzos de las poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes** para enfrentarlos. **Sus estrategias de adaptación y mitigación se ven limitadas, en gran parte, porque sus derechos a la tenencia de la tierra y sus territorios no están garantizados y asegurados** en nuestros países.

8 En toda nuestra región **persiste la violencia contra las mujeres**, evidenciada en los altos índices de feminicidio, desapariciones y denuncias que se han logrado realizar durante el periodo de pandemia. Son evidentes también las profundas **desigualdades de género** al ser las mujeres las que han tenido que **afrentar el incremento del cuidado familiar, atender a quienes se enfermaron, así como acompañar el proceso educativo** de niños, niñas y adolescentes al cerrarse los colegios, priorizándose la teleeducación y sin contar con los recursos suficientes para esta labor.

9 Finalmente, llamamos la atención sobre los altos niveles de movilidad humana generados a raíz de la pandemia en varios países de la región y que marcaron un **retorno de la ciudad al campo de miles de personas, lo que significará, a su vez, nuevas presiones sobre la tierra y sobre el abastecimiento de las familias en el campo**, procesos que ameritan una especial atención.

Por otra parte, la **migración centroamericana** originada por el empobrecimiento y la violencia en la subregión, así como la **migración a causa de la crisis venezolana** hacia diversos países del continente, han puesto en la agenda regional la **necesidad de atender este fenómeno y a las personas en situación de movilidad**. Este importante grupo de la población padece de una alta vulnerabilidad y, con mayor énfasis, quienes se dedican a actividades agrícolas, cuyos derechos son frecuentemente violentados. Esta situación se ha visto agravada en el tiempo de crisis sanitaria al no contar con políticas específicas de apoyo o por verse expulsados de los países de destino.

En este contexto, las organizaciones que formamos parte de la Coalición declaramos lo siguiente:

10 **Reiteramos nuestro compromiso con la justicia y los valores democráticos**, nuestra permanente lucha para cambiar los sistemas que sostienen las **múltiples desigualdades** en nuestra región y, **especialmente, la desigualdad de acceso, seguridad de la tenencia y control sobre la tierra**, comprometiéndonos a trabajar por los derechos y con las poblaciones que viven de la tierra y en sus territorios.

11 Demandamos a los Estados de nuestra región **que se garantice el derecho que tienen los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes a sus tierras y territorios, a ser consultados y dar su consentimiento previo, libre e informado frente a los diferentes proyectos y medidas que los involucre**, con particular atención al periodo de reactivación económica tras la crisis generada por la pandemia, evitando soslayar sus derechos mientras se promueve el extractivismo y el agronegocio.

12 Exigimos **que se valore el trabajo que realizan los pueblos en defensa de sus tierras y territorios y que se respete su derecho a defender derechos**. En ese sentido, consideramos que es imprescindible **que se enjuicie a los responsables de los asesinatos y desapariciones** de defensores y defensoras, y que **cese a la impunidad** de quienes atentan contra la vida de hombres y mujeres defensoras.



13

Exigimos **que los Estados de la región adopten e implementen la *Declaración de los Derechos de Campesinos y Campesinas y otras personas que trabajan en la ruralidad* y que ratifiquen**, los que aún no lo han hecho, **el Acuerdo de Escazú**. Ambos representan instrumentos de defensa para los sectores campesinos e indígenas que luchan y defienden la tierra.

14

Exigimos que la reactivación económica **tras la crisis generada por la COVID-19 no signifique volver a la vieja normalidad en la que el crecimiento económico sea el centro, sin tomar en cuenta el bienestar y mejora de las condiciones de vida de nuestros pueblos, así como el cuidado del medioambiente y de los ecosistemas**. Es necesario considerar los diferentes sistemas y formas de vida que ponen en el centro a las personas y a la naturaleza.

15

Llamamos a los gobiernos y al sector privado a **evitar inversiones que pongan en riesgo las posibilidades de vida y futuro de las comunidades vía la apropiación de grandes extensiones de tierra, la expulsión de sus territorios, la contaminación de sus fuentes de agua y atentando contra la biodiversidad** que es clave para su vida. Toda inversión debe poner en el centro los intereses de las comunidades que habitan los territorios, **respetando sus derechos individuales y colectivos, así como la gobernanza ejercida ancestralmente en sus territorios**.

16

En vista del rol central de la agricultura campesina familiar en la alimentación de las poblaciones urbanas y rurales -evidenciado en la provisión de alimentos durante la pandemia-, demandamos que **se formulen e implementen políticas y programas con justicia de género y enfoque intercultural dirigidas a impulsar el desarrollo de las actividades productivas de las comunidades**, en línea con los objetivos y pilares del Decenio de la Agricultura Familiar. Asimismo, demandamos que se prioricen e incentiven en todos nuestros países modelos de **agroecología** que combinen la producción sostenible, el fortalecimiento de mercados locales y que garanticen la **soberanía alimentaria**.

17

Demandamos que se establezcan **programas y políticas** en todos nuestros países, **que atiendan los procesos de movilidad humana, con un claro respeto a los derechos humanos y garantías** para que las personas nacionales y extranjeras en procesos de movilidad no vean afectados sus derechos.

18

Exigimos a los Estados implementar **programas y políticas que atiendan la situación de las mujeres rurales, que pongan fin a las distintas formas de violencia** que viven en sus territorios y reconozcan el **valor que tiene el cuidado familiar que ellas realizan, así como su rol en la producción de alimentos y en la sostenibilidad de la vida**.

19

La gobernanza de la tierra centrada en las personas es el corazón de nuestras apuestas, las mismas que reafirmamos luego de estos días de discusión y reflexiones. Consideramos que, para construir una región menos desigual, más justa y democrática, que alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en donde nadie se quede atrás, **es imprescindible reducir la enorme desigualdad que existe en cuanto al acceso, tenencia y control de la tierra.** En ese sentido, nos comprometemos a seguir acompañando a los movimientos, a los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes en sus **justas luchas por el reconocimiento y la defensa de su derecho a la tierra y el territorio.** Asimismo, seguiremos trabajando por el logro de una **justicia de género** al interior de nuestra Coalición, en todas las organizaciones de las que somos parte y en todos nuestros países, y para **enfrentar el racismo estructural** que está en los cimientos de las desigualdades que viven los pueblos en nuestra región.

Finalmente, debemos mencionar que durante el desarrollo de la sesión sobre acaparamiento de tierra y afectaciones a la vida de las mujeres rurales del Foro de la Tierra 2020, dos panelistas, Edith Martearena de la región del Chaco argentino y Damarez Ramírez, del pueblo Shipibo Konibo de la comunidad de Santa Clara de Uchunya en la Amazonía peruana y vicepresidenta de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU), denunciaron la situación de amenaza, riesgo y desalojo en la que se encuentran sus dirigencias y comunidades. En el caso de Damarez Ramírez, se denunció la reciente amenaza de muerte recibida por Miguel Guimaraes, presidente de FECONAU.

Al cierre de nuestro foro queremos expresar toda nuestra solidaridad a las lideresas y a sus pueblos y exigir nuevamente que cese el despojo y las amenazas contra hombres y mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes que luchan por la tierra y defienden el territorio.